

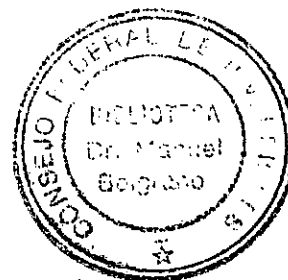
9
F8111
C26
IV

37865

1º INFORME PARCIAL

"DESARROLLO ENDÓGENO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE"
ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES

por Mirta Elizabeth Laciari



9/F3111
C26
IV

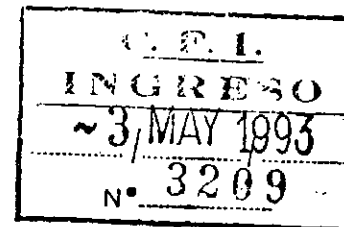
2704
280
242

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Buenos Aires, 30 de Abril de 1993

Buenos Aires, 3 de mayo de 1993.

Señor
Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Ing. Juan José Ciacéra
S/D



De mi mayor consideración:

Por la presente hago entrega del lr. Informe Parcial
del tema "Aspectos Legales e Institucionales" del Expte. 2221, Desarro
llo endógeno del Partido de San Vicente.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

A stylized, handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Dra. Mirta Elizabeth LACIAR

DESARROLLO ENDOGENO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE - ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES

I. NATURALEZA JURIDICA DEL CUERPO DE AGUA

I. A. Consideración jurídica del agua

1. En primer lugar es necesario señalar que la consideración de las aguas como objeto de derecho deviene de su importancia económica y social.

Desde el punto de vista jurídico el agua es una cosa, es decir, un objeto material susceptible de tener un valor (art. 2311 Código Civil).

Fisicamente el agua constituye un cuerpo, y cualquiera sea la necesidad que satisfaga, ".....representa un valor económico.." (1).

Definida como una cosa, y conforme el art. 2313 del Código Civil, el agua puede revestir la calidad de cosa inmueble o mueble; a su vez, puede ser inmueble por naturaleza o por accesión.

El agua es inmueble por naturaleza según el art. 2314 del Código Civil cuando en su estado natural forma parte integrante del suelo, como en el caso de los ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos naturales de agua.

Es inmueble por accesión, cuando corriendo por conductos artificiales (canales), o estando almacenada en receptáculos artificiales se encuentre inmovilizada, según el art. 2315 del Código Civil.

El agua es una cosa mueble, cuando es separada del suelo al cual adhiere conforme el art. 2319 del Código Civil, o cuando no reúne las condiciones establecidas en el art. 2315.

Esta caracterización del agua que se hace siguiendo a Marienhoff, no es una mera abstracción. Reviste importancia práctica. En efecto, la calidad de inmueble o mueble determina, por ejemplo, la viabilidad o no del empleo de los interdictos y acciones posesorias.

En materia penal, el uso ilícito del agua si se trata de una cosa mueble constituirá hurto o robo. El uso ilícito del agua como cosa inmueble constituirá usurpación.

2. Con respecto a las clasificaciones que se hacen de las aguas se considerarán exclusivamente las que se basan en su naturaleza y en su condición legal.

De tal manera las aguas pueden clasificarse en:

- Aguas marítimas.
- Aguas pluviales.
- Aguas terrestres.

Estas últimas se dividen a su vez en:

- Superficiales.
- Subterráneas.

Las superficiales se subdividen en:

- Corrientes.
- Estancadas.

Por su condición jurídica las aguas pueden ser:

- Públicas.
- Privadas.

I. B. Condición jurídica de la laguna.

3. Siguiendo los lineamientos expuestos en el párr. 2 puede afirmarse que la laguna integra el grupo de las aguas terrestres llamadas "dormidas" o "durmientes", porque "...su circulación es imperceptible... Pero ellas no se encuentran absolutamente inmovilizadas: están casi inmóviles; se trata de una quietud tan sólo aparente o relativa..." (2). Es decir, que estas aguas tienen un movimiento paulatino y lento que resulta imperceptible.

Dentro de las aguas dormidas se encuentran el lago y la laguna que son especies de un mismo género. La diferencia radica en la magnitud o tamaño (3).

Desde el punto de vista legal el Código Civil reconoce la existencia de ambos cuerpos de agua. Así el art. 2578 al tratar del aluvión como forma de adquirir el dominio menciona a los lagos y lagunas.

Cuando el codificador determina la condición jurídica de las aguas, sólo se refiere a los lagos (art. 2340 inc. 5 y 2349).

No obstante, es necesario tener en cuenta el Esbozo de Freitas que en su art. 328, inc. 5, habla de lagunas o lagos equiparando ambos conceptos, por ser éste una de las fuentes en las que nuestro codificador se basó.

4. Doctrinariamente se ha pretendido diferenciar el lago de la laguna atendiendo a la navegabilidad o no de los mismos. Marienhoff (4), analizando el 2340 del Código Civil anterior a la reforma de la Ley 17.711 y atento al requisito que la Ley exigía para considerar navegable a un lago (navegable por buques de más de 100 toneladas), se inclina por aplicar a las lagunas el régimen de los lagos no navegables. Infra párr 6, se analizará especialmente lo relativo a la navegabilidad.

Por otra parte Allende (5) extiende a las lagunas el régimen de los lagos, citando al respecto el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Frederking, Gustavo c/Provincia de Buenos Aires s/uso y goce de la laguna de Mar Chiquita", 17-8-1923 Fallos Tq138. En dicho Fallo el criterio seguido es que "...los lagos y, por identidad de motivos las lagunas, se encuentran sometidos por Ley común a regímenes diferentes según sean o no navegables....".

A partir de la modificación introducida por la Ley 17711 al art. 2340 inc. 5, que eliminó toda pauta sobre la navegabilidad de los lagos, se reabre la discusión en torno a las diferencias entre lagos y lagunas.

No obstante, cualquiera sea el criterio de navegabilidad que se adopte, la discusiones doctrinarias que consideran a tales aguas del dominio público (Spota) o privado (Allende) pierden importancia después de la reforma del art. 2340 inc. 3 in fine del Código Civil.

5. La determinación de la navegabilidad o no de un curso de agua tiene trascendencia jurídica. La misma, contribuye a establecer la condición jurídica del cuerpo de agua.

De la interpretación doctrinaria que se hace de los arts. 2340 inc.5 y 2349, resultan dos posiciones:

- 1) Independientemente de la navegabilidad o no, las aguas son del dominio público (Spota, Marienhoff, Cano).
- 2) Los cursos de agua navegable son del dominio público, en tanto los no navegables son del dominio privado del Estado o de los particulares (Allende).

Aún para la primera posición doctrinaria, es importante definir cuales son las condiciones que debe reunir un cuerpo de agua para ser navegable.

Es que que la navegabilidad, comporta consecuencias jurídicas tales como:

- Pertenencia de los aluviones: en los cursos no navegables

corresponde a los propietarios, en los navegebles al Estado.

- Las márgenes en los ríos navegables están sujetas a la servidumbre del art. 2639 (camino de sirga).
- Concurrencia de jurisdicciones nacional y provincial, en el caso de los cursos navegables, por la competencia del Estado Nacional en materia de navegación.

Con respecto a los lagos, el Código Civil antes de la reforma de la Ley 17.711 establecía el siguiente criterio de navegabilidad:

- Los lagos eran legalmente navegables cuando eran surcados por buques de más de 100 toneladas; su eliminación, por cierto fundada, reabrió la discusión respecto a qué debe entenderse por navegable.

Sin perjuicio de considerar las circunstancias de hecho de un curso de agua para calificarlo de navegable, hay que tener presente que en este caso se trata de la "navegabilidad legal".

Por ello, puede suceder que un curso de agua se preste a cierta navegación de hecho, pero que no reúna las condiciones necesarias para ser considerado legalmente navegable.

La navegabilidad de un cuerpo de agua tiene efectos jurídicos cuando responde a un interés general.

La doctrina se halla conteste que para considerar un curso de agua legalmente navegable "...debe servir como medio de transporte y hacer el oficio de gran camino, o sea, debe servir para el transporte público de personas y o cosas..." (6).

Por ello, la navegación con simples fines privados no es suficiente para convertir un curso de agua en legalmente navegable. "...el tránsito de embarcaciones utilizadas por algunos ribereños, sea con fines de recreo o para transporte de sus productos, no constituye una navegación en el sentido legal..." (7).

Obviamente la determinación de cuando el transporte responde a un interés general, es una cuestión de hecho que debe ser resuelta en cada caso particular.

6 . La navegabilidad analizada en el párr. anterior es una condición a la que se recurre a los efectos de deslindar el dominio público del privado.

A partir de la reforma del art. 2340 del Código Civil ofrece algunas dificultades para su determinación.

El art. 2340 establece que: "Quedan comprendidos entre los bienes públicos: ...5º) los lagos navegables y sus lechos..."

La reforma de la Ley 17.711 mantuvo a estos lagos navegables dentro del dominio público, aunque no indica pauta para determinar la navegabilidad.

Se incurre en un error importante pues se menciona a "los lagos y sus lechos", esto resulta redundante ya que el lago es agua y lecho.

Se eliminan las márgenes que dejan de ser del dominio público para pasar al dominio privado. Esto ha sido cuestionado doctrinariamente (Allende, Borda).

En tanto la cuestión más seria de interpretación se ha planteado en torno a los lagos no navegables. El art. 2349 se limita a disponer que: "El uso y goce de los lagos que no son navegables, pertenece a los propietarios ribereños".

El Código Civil sólo concede el uso y goce, no la propiedad. Doctrinariamente se han esbozado dos corrientes de opinión:

- Los lagos pertenecen al dominio público (Bibiloni, Spota, Marienhoff, Cano, Legón). Los lagos no navegables, aunque no están incluidos expresamente en el art. 2340 integran el dominio público, pues el principio general en materia de aguas es que "son públicas". Esta posición se funda en el propio Código Civil que: en el art. 2340 sienta el principio de que las aguas son públicas. En el art. 2342 no menciona entre los bienes privados del Estado a los lagos no navegables. En el art. 2349 sólo confiere a los propietarios el uso y goce, no el dominio.
- Son del propietario del suelo, y según los casos serán del dominio privado del Estado o de los particulares (Allende, Segovia, Salvat). Esta posición se funda en el art. 2340 inc. 5, que sólo menciona a los navegables integrando el dominio público. Los no navegables no tendrían tal condición jurídica. Para este sector de la doctrina el art. 2349 del Código Civil contemplaría la situación de propietarios de tierras que limitan con el lago y no la de los propietarios de la zona donde el mismo se encuentra.

7. Este trabajo adhiere a la primera posición doctrinaria. Es de señalar que estas doctrinas, muchas de las cuales se plantearon con anterioridad a la reforma del art. 2340 por la Ley 17.711 han perdido fuerza ante el inc. 3, que incluye entre los bienes públicos "...toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general...". Por ello "... si el agua de un lago no navegable es de aquellos que tenga o adquiera aptitud de satisfacer usos de interés general queda comprendido entre los bienes públicos" (8).

La caracterización de un bien como del dominio público determina la titularidad del Estado. Esto, condiciona la forma y modalidad en que el mismo puede ser usado (se trate de usos comunes o especiales) y las restricciones y límites que puedan establecerse en función de tal afectación.

Con relación a quién pertenece tal dominio público, el art. 2339 del Código Civil dispone que las cosas son del dominio público del Estado General que forma la Nación o de los Estados particulares de que ella se compone según la Constitución Nacional.

8. El dominio de los cuerpos de agua, navegables o no, situados dentro del territorio provincial o en el sector que atraviecen una provincia, pertenecen al dominio de ésta. Este principio es sustentado por la mayor parte de la doctrina y reconocido en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando el art. 2340 se refiere al dominio público, parece limitarlo al Estado Nacional o a los Estados provinciales. No obstante, consecuente con nuestra forma federal de gobierno y de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, "... no debe perderse de vista que los municipios también pueden ser titulares del dominio público" (9).

El art. 2344 trata de los bienes municipales como aquellos "que el Estado o los Estados han puesto bajo el dominio de las municipalidades".

En este precepto están contenidos todos los bienes municipales públicos y privados, que son aquellos que le son transferidos a las municipalidades por las provincias.

I.1 Situación actual.

9. El Municipio de San Vicente ha intentado durante varios años (1965 en adelante), la transferencia a su favor de la superficie ocupada por la Laguna de San Vicente.

La tramitación ante la Provincia de Buenos Aires del respectivo expediente implicó la intervención de distintos organismos técnicos de asesoramiento (Geodesia, Hidráulica y Asesoría General de Gobierno).

A lo largo de dichas actuaciones, se discutieron muchas de las cuestiones antes analizadas, dentro del contexto del Código Civil, antes y después de la reforma de 1968.

Asimismo, se efectuaron estudios sobre geomorfología de la Cuenca, en "Estudios Básicos Para la Recuperación y Aprovechamiento de la Laguna de San Vicente", realizado por el Consejo Federal de Inversiones en 1990.

Del Estudio precedentemente citado resulta que (10):

- La laguna carece de efluentes.
- El manto de barro del fondo sigue en progresivo aumento.
- La expansión de flora y fauna reduce considerablemente en forma progresiva el tirante de agua.

- Se considera navegable con fines esencialmente deportivos, en una pequeña parte de la superficie del espejo de agua.

Por las características señaladas se recomienda en el referido Estudio, reducir las actividades deportivas en razón del crecimiento de barro de fondo y la expansión subacuática de raíces.

10. Del informe técnico y, del análisis jurídico efectuado a lo largo de este Capítulo, se señala que dicha laguna, ni técnica ni jurídicamente puede ser considerada navegable. Considerando la importancia que tal cuerpo de agua reviste para la zona y conforme lo señalado en los párrs. 6 y 9 se puede afirmar que la laguna de San Vicente debe integrar el dominio público municipal.

Esta solución, encuadra dentro de los términos de la Ley provincial 9533. Dicha Ley establece que constituyen bienes del dominio público municipal "... Los espacios verdes o libres públicos que se hubieren incorporado al dominio provincial con anterioridad a esta Ley ...".

El art. 6 de la Ley de referencia, faculta al Ministerio de Economía, de oficio o a solicitud de los municipios, a instrumentar las medidas necesarias para incorporar tales bienes al dominio municipal.

I. 1. a). Legislación nacional vigente.

11. De la estructura jurídica-política que establece nuestra Constitución Nacional resultan dos centros de poder: Nación y provincias.

A los efectos de este Estudio se mencionarán a continuación los arts. de la Constitución Nacional de aplicación al caso. Las cuestiones de competencias serán analizadas Infra párr.17

- Art. 67 inc. 11, 9, 14, 16, 27 y 28.

12. Del art. 67 inc. 11 de la Constitución Nacional, se desprende que las normas de fondo corresponde dictarlas al Congreso Nacional.

En virtud de ello, se dictó el Código Civil, el cual regula la relación entre los particulares.

A los efectos del presente Estudio son de aplicación los siguientes arts.:

- Arts. 2340 a 2349 (de las cosas consideradas en relación con las personas).
- Art. 2578 (aluvión).

- Arts. 2630 a 2653 (servidumbres).
- Arts. 3104 a 3107 (servidumbre de sacar agua).

En este párr. se han mencionado las normas nacionales básicas de aplicación para este Estudio. Respecto a las demás normas involucradas, se remite a la Tabla Índice del Anexo II en la cual ha sido transcrita toda la legislación vigente aplicable a la Laguna de San Vicente.

I. 1. b). Legislación provincial vigente.

13. La Constitución de la provincia de Buenos Aires se remonta a 1934.

En su Sección I^o, Declaraciones derechos y garantías, art. 1 sienta el principio de que la provincia como parte integrante de la Nación, se constituye bajo la forma representativa republicana y federal.

En la Sección 6^o se ocupa del régimen municipal.

14. Código Rural: Este cuerpo normativo regula los hechos, actos y bienes de la actividad rural dentro del ámbito provincial. Sus disposiciones alcanzan a toda forma de explotación derivada directa o indirectamente de la actividad rural ubicada o no dentro de los ejidos urbanos.

A lo largo de su articulado se ocupa de:

- Suelo.
- Deslinde de propiedad rural.
- Colonización.
- Ganadería.
- Sanidad animal.
- Bosques.
- Sanidad Vegetal.
- Caza y pesca.
- Agua y atmósfera (dentro de estas se ocupa del régimen de riego).

15. La Ley 10907 sancionada recientemente se ocupa de las áreas protegidas, posibilitando su constitución sobre bienes del dominio público y/o privado.

El art. 10, clasifica las reservas naturales según su estado patrimonial en:

- Reservas naturales provinciales.
- Reservas naturales municipales.
- Reservas naturales privadas.

Es de destacar que según su tipo, la Ley establece una amplia clasificación de áreas, entre otras:

- Parques provinciales.
- Reservas faunísticas.
- Reservas botánicas.
- Reservas de protección de suelos y/o cuencas hídricas.

Para las demás normas involucradas en este Estudio se remite a la Tabla Índice del Anexo II.

I. 2. Deslinde de Jurisdicción legislativas y administrativas.

I. 2. A. Estado Nacional - Estados provinciales.

16. En un país de estructura de gobierno federal como el nuestro lo referente a jurisdicción hídrica es complejo. Esto lleva a la necesidad de deslindar las facultades de la Nación frente a las de las provincias.

Para entender esta compleja relación es necesario distinguir el dominio de la jurisdicción.

Respecto al primero ha sido objeto de un análisis exhaustivo en el Cap. I.

La jurisdicción como ya lo señalara Pedro. J. Frías (11) es "la suma de facultades divisibles en las diversas materias de gobierno. El dominio se ejerce sobre las cosas, la jurisdicción sobre las relaciones...". Así la jurisdicción es independiente del dominio, aunque éste lleve indefectiblemente a la jurisdicción en la medida que nada la limite o la excluya.

"...La jurisdicción no necesariamente lleva al dominio, sin embargo, tiene mayor cuota de poder que el dominio..." (12).

En diferentes fallos la Corte Suprema (F.154 y 312) ha entendido también que dominio y jurisdicción no son equivalentes ni correlativos.

Complejas situaciones que se plantean en los diversos niveles de gobierno, muestran que más allá del dominio nacen funciones que requieren de otra competencia.

La disociación existente entre ambos conceptos surge a partir de situaciones fácticas.

La cuestión es dilucidar porqué este proceso se cumple "...a pesar del dominio provincial y a favor de la jurisdicción nacional...", como ya lo señalara el autor precedentemente citado. A partir de dicho análisis será posible conocer las consecuencias que ello involucra y de cómo esta misma situa-

ción puede ser extrapolada a la relación provincia-municipio, que es el objeto de este Estudio.

17. Se analizará en primer término que dice nuestra Constitución Nacional respecto a la jurisdicción nacional. Esta se encuentra delimitada por los arts. 67 incs. 9 y 12 y, 108. Dichos arts. atribuyen al Congreso de la Nación competencia exclusiva en materia de navegación y comercio interprovincial e internacional.

Cuando se trata de ríos no navegables la jurisdicción le corresponde a las provincias.

La competencia surgida de los arts. citados, es decir la facultad de administrar y reglamentar la navegación, no conlleva la necesidad o la existencia de la propiedad de dicho cuerpo de agua. Ello no significa que dicha facultad que tiene el Estado Nacional no sea suficiente para que pueda desempeñar las funciones constitucionales que envuelve dicha jurisdicción.

Esta comprende sólo lo atinente a la navegación internacional e interprovincial.

La navegación dentro de cada Estado provincial queda fuera de la jurisdicción federal.

Cada uno de los Estados provinciales se ha reservado el poder pleno de legislación y jurisdicción.

En síntesis, la Nación es competente en todo aquello vinculado a la navegación interprovincial e internacional. Las demás funciones, incluso la navegación dentro de cada provincia, es competencia exclusiva de los Estados provinciales.

No obstante lo expuesto, no existe unanimidad en la doctrina respecto a la competencia del Congreso Nacional para regular en materias ajenas a la navegación.

Por otra parte, del análisis de los arts. citados precedentemente, surge que la jurisdicción de los ríos no navegables corresponde de forma exclusiva a la provincia que atraviesa dicho cuerpo de agua.

18. Nuestra estructura federal de gobierno tal lo señalado Supra párr.16, implica la existencia de tres jurisdicciones. Ello involucra una determinada distribución de poderes a saber (13):

- El Estado federal tiene como ámbito territorial de validez al territorio conjunto perteneciente a todas las provincias más el territorio federal que comprende Capital Federal, Antártida e islas del Atlántico Sur; el ámbito personal de validez comprende a la población en su conjunto y a los órganos públicos que forman la estructura federal de gobierno, esto en función de lo que determine el ámbito material de validez del derecho; y como ámbito material de validez a la regulación jurídica de los intereses comunes a todas las provincias, es decir, no los intereses propios de cada pro-

vincia en particular:

- Los Estados provinciales, tienen como ámbito territorial de validez a su propio territorio; como ámbito personal a su respectiva población y a los órganos públicos que forman la estructura del gobierno provincial; y como ámbito material a la regulación de los intereses de su propia provincia.
- Los municipios presentan las mismas características que las señaladas para los Estados provinciales. Su ámbito de validez territorial, personal y material comprende la órbita de sus respectivos ejidos.

Esta distribución de poder señalada, implica que tanto el Estado Nacional como los Estados provinciales y los municipios poseen facultades propias. Estas, definidas en relación con los intereses que regulan.

Cuando las materias sobre las que versan los intereses regulados, abarcan las mismas funciones, generalmente se habla de facultades concurrentes. Sin embargo, tal como sostiene Quiroga Lavié (14) dicha interpretación por parte de la doctrina es errónea. De admitir este criterio, se estaría aceptando que las provincias podrían regular determinados intereses comunes, es decir, aquellos cuyas materias coinciden con las reguladas por la Nación.

Por ello creemos, al igual que el autor citado precedentemente, que no existen facultades concurrentes entre el Estado Nacional con los provinciales. Si materias concurrentes.

Para que existan facultades concurrentes, deberían tener ese carácter todos sus ámbitos de validez y no uno sólo.

Habría facultades concurrentes cuando las materias sobre las que ejerce su jurisdicción una provincia, coinciden con las materias sobre las que ejerce su jurisdicción el Estado Nacional, porque éste, al hacer uso de ellas se comporta como si fuera autoridad local en ese ámbito.

19. Los distinguos señalados precedentemente tienen su razón de ser a la hora de efectuar el deslinde de jurisdicciones legislativas y administrativas.

Las facultades de la Nación están regladas, las de las provincias en cambio no son delimitadas por la Constitución Nacional. Esto implica que las facultades exclusivas del gobierno federal son las que expresamente están conferidas en la Constitución Nacional y por tanto, son limitadas y enumeradas (arts. 67, 86, 100 y 101).

Los gobiernos provinciales pueden ejercer todas las facultades que no fueron otorgadas por la Constitución Nacional al gobierno federal y las que expresamente se hubieran reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación (art 104).

Sintetizando, las provincias tienen facultades ilimitadas y no enumeradas.

La enumeración de atribuciones a favor de las provincias que hace el art. 107 de la Constitución Nacional es enunciativa y por tanto innecesaria. Así Quiroga Lavié (15) citando a Gorostiaga sostiene que el Estado provincial viene a ser la regla y forma del derecho común; el Estado federal la excepción.

Las facultades concurrentes del Estado Nacional y de los Estados provinciales, sólo pueden darse en el ámbito provincial como se señaló Supra párr. 17, (arts. 4, 67 incs. 2 y 16 y 107 de la C. N.).

Dichas facultades son limitadas, es decir, que los respectivos gobiernos pueden o no ejercerlas e incluso pueden ejercerlas simultáneamente.

Que pasa cuando dentro de estas facultades concurrentes el gobierno federal legisla sobre materias y funciones cuyo desenvolvimiento se da en una provincia?. El caso típico sería en materia de recursos naturales, el agua por ejemplo. Si entre las facultades, en razón de la materia, las mismas interesan a todo el país (la regulación jurídica y ejecución de una gran obra hidráulica), el Estado Nacional no estaría haciendo uso de las facultades concurrentes. Esta es exclusiva. Sintetizando, la jurisdicción exclusiva del Estado Nacional y, siguiendo la Tesis de Guillermo J. Cano (16), sería:

- Respecto a la navegación fluvial interprovincial.
- Respecto a grandes obras hidroeléctricas que la legislación vigente permite declarar de jurisdicción nacional como se ha hecho en algunos casos.
- Respecto a la política fluvial y lacustre internacional.

En todos esos ríos navegables o no, "...todas las demás materias de competencia gubernamental son de jurisdicción provincial..." (17).

El gobierno federal a fin de proveer al adelanto y bienestar en el interior de una provincia y, a fin de promover el desarrollo de los recursos hídricos tiene facultades legislativas y ejecutivas que devienen concurrentes con las de la provincia. Ello no obsta a que las provincias puedan realizar por su lado las mismas funciones en forma simultánea con el gobierno federal.

Respecto a las facultades exclusivas del Estado Nacional en el territorio provincial, y que devienen de lo señalado en la tesis del autor citado precedentemente, éstas serían:

- Ejercer el dominio territorial. Puede ser titular en territorio provincial de inmuebles de propiedad privada o del dominio público, si mediare cesión.
- Dictar legislación exclusiva sobre establecimientos de utilidad nacional (arts. 67 inc. 27 C.N.).

- Regular el comercio interprovincial e internacional.
- Proveer a la seguridad de las fronteras.
- Arreglar los límites del territorio nacional y fijar los de las provincias.
- Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias.
- Promover la Industria, la colonización de tierras de propiedad nacional, la construcción de canales navegables, la explotación de los ríos interiores.

20. Supra párr.18, se señaló que el Estado Nacional tiene facultades concurrentes con los Estados provinciales tanto en materia legislativa como ejecutiva. A continuación se describirán cuales pueden ser los temas involucrados en dichas facultades concurrentes y que conciernen al poder administrador:

- Inteligencia (recolección, procesamiento y difusión de la información).
- Formulación de política ambientales.
- Programación y planificación a corto y largo plazo.
- Ejercicio del "ius edicendi" o poder de legislar y reglamentar.
- Actividad empresarial (prestación de servicios y construcción de obras públicas).

21. Las provincias tienen sus propias facultades exclusivas. Obviamente las facultades de las provincias en materia de recursos hídricos son mayores que las nacionales. Los aspectos procesales, y todas aquellas otras facultades propias de la administración pública provincial, son de competencia exclusiva de las provincias a saber (18):

- Declaración y evaluación del impacto ambiental.
- Concesión de uso de bienes del dominio público.
- Régimen de licencias y permisos.
- Encuestas públicas.
- Audiencias públicas.
- Organización.
- Ejercicio del "ius edicendi".
- Aplicación de políticas - Poder de policía.
- Actividad empresarial (prestación de servicios públicos y construcción de obras públicas).
- Cooperación federal.

I.2. B. Estados provinciales - Municipios.

22. De nuestra Constitución Nacional (art.5), surge que los poderes municipales son recibidos por delegación de los gobiernos provinciales. Su organización no solamente es una facultad provincial (al no ser delegado a la federación), sino que es una obligación que debe ser cumplida por las provincias para que el gobierno federal garantice su autonomía. Hay quienes califican a los municipios como "gobiernos" y otros como "administraciones".

En Argentina hay provincias que permiten a ciertas municipalidades dictarse sus propias "cartas orgánicas" dentro del marco de la Constitución provincial. Siempre, son dichas constituciones y las "leyes orgánicas de las municipalidades", en aquellas enmarcadas, las que deslindan las atribuciones y deberes de las municipalidades.

Implicitamente los municipios tienen un poder preexistente al que se les reconoce a las provincias. No obstante, cuando se organiza el Estado Nacional cada provincia se reserva, entre otras, la facultad de darse sus propias instituciones.

23. Las Constituciones provinciales y las leyes determinan el régimen municipal.

En síntesis, son las constituciones provinciales las que deciden la extensión de las facultades municipales para legislar y los órganos municipales que pueden hacerlo.

24. La provincia de Buenos Aires se ha reservado para su legislatura el poder de dictar "ordenanzas generales" en materias que ella misma, sin embargo, ha delegado a los municipios, pero cuyo ejercicio excepcional por el delegante (Legislatura) considera necesario en ciertos casos (19).

En materia hídrica, no obstante, la provincia a delegado sólo en dicho ámbito ciertas facultades ejecutivas que involucran:

- Promoción turística.
- Zonificación.
- Poder de policía.
- Ejercicio de obras públicas.
- Prestación de servicios públicos (art. 52 L. O. M.).
- Concesiones para la prestación de servicios públicos (arts. 53 y 230 L.O.M.).
- Aceptación o rechazo de donaciones o legados ofrecidos a las municipalidades (art. 55 L.O.M.).
- Reglamentar ordenanzas.
- Medidas preventivas.
- Aplicación de sanciones.
- Otras.

25. Las facultades legislativas corresponden al Consejo Deliberante. Dichas facultades involucran el dictado de ordenanzas. Las mismas se encuentran establecidas en los arts. 26 y

29 de la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto/Ley 10100/83 y se refieren a:

- Ornato.
- Sanidad.
- Seguridad.
- Cultura.
- Educación.
- Conservación.
- Fomento.
- Tasas y contribuciones.
- Otros.

Por supuesto que esta enunciación no pretende ser exhaustiva. Al municipio le corresponde, a más de las de las precedentes, todas aquellas que encuadran dentro del ámbito de su competencia constitucional y en concordancia con las facultades legislativas y ejecutivas de las provincias y la Nación.

Del análisis de las diferentes funciones legislativas y ejecutivas que les compete a los municipios de la Provincia de Buenos Aires, se puede inferir que en materia hídrica pueden generarse serios conflictos de competencia con los demás niveles de gobierno. Esto, entre otras cosas, obedece a que el área territorial del municipio se delimita políticamente. De esta forma operan además de las facultades municipales facultades provinciales y nacionales.

Al municipio le corresponde solucionar y atender todas aquellas cuestiones que se suscitan dentro de su ámbito territorial y que le han sido conferidas.

Al confluir tres jurisdicciones, se generan problemas de competencia con superposición de facultades originadas por una no muy clara distribución de misiones y funciones entre municipio, provincia y Nación, como ya se señaló precedentemente.

26. De las funciones legislativas y ejecutivas que le corresponden al municipio transcriptas Supra párrs. 24 y 25 se puede inferir que cuantitativamente dichas facultades son más numerosas o al menos debieran serlo.

En el Cap. III se harán las recomendaciones pertinentes respecto al organigrama institucional más adecuado. Este debe contemplar todos los aspectos referidos a los conflictos de competencias originados a partir de una mala distribución de funciones.

También se analizará todo lo referente a la legislación aplicable y los conflictos que la misma ocasiona a partir de la superposición de normas y los vacíos existentes. Todo ello a fin de establecer, jurídica e institucionalmente, la situación legal e institucional actual de la Laguna de San Vicente objeto de este Estudio. Si las respuestas dadas al presente, son idóneas y concordantes con la legislación vigente y de acuerdo a la doctrina imperante sobre esta materia.

1.2. a) Inventario de instituciones con responsabilidades en el área actuantes en el municipio.

27. No existe un modelo ideal para organizar la administración hídrica. La eficacia o no de un sistema está condicionada a circunstancias geográficas, históricas, políticas y jurídicas por las que atraviesa el país.

La tendencia del hombre ha sido hacer usos simples de cada recurso hídrico de acuerdo a sus necesidades. Por ello el aprovechamiento del agua fue inicialmente orientado hacia sus usos y no en función del recurso en sí mismo. Esto determinó que previo a leyes de agua primero se dictaran leyes de riego o de navegación, y antes que administración hídrica se crearon organismos responsables en forma separada.

No obstante, la multiplicidad de usos de dicho recurso requiere que ellos sean coordinados. Existen usos consuntivos (riego, domésticos etc.), como ya la señalara Guillermo J. Cano (20), y otros que no lo son (navegación, generación eléctrica etc.). A esto hay que agregar el factor de interdependencia entre todos los recursos naturales involucrados a causa de la movilidad del recurso hídrico.

Por ello es necesario lograr la integración de dicho recurso con los otros.

Esto es posible bajo dos aspectos diferentes:

- Territorial.
- Funcional.

El primero, porque tratándose de un país federal como el nuestro requiere la coordinación entre las diferentes jurisdicciones (Nacional, provincial y municipal) involucradas.

El segundo, obedece a la necesidad de poner bajo una dirección y control únicos en el respectivo nivel político, los diferentes organismos y dependencias administrativas responsables del recurso y en relación con los otros. También porque de esta manera se puede lograr la articulación con los otros sectores del gobierno (salud, economía, transporte etc.).

28. A partir de lo expresado en el párr. anterior se realizó el Inventario de las instituciones con responsabilidades en el área y que operan en la jurisdicción del municipio de San Vicente.

El esquema propuesto en el Anexo I incorpora a todas las funciones y temas de responsabilidad que, a nuestro juicio, corresponde al organigrama más adecuado de administración hídrica.

drica en el ámbito municipal. Obviamente, existe la posibilidad de desagregar con mayor minuciosidad las funciones transcritas. Sin embargo, para este ámbito que es el objeto del Estudio, consideramos que no es conveniente una mayor descripción de funciones. Esto en razón de que el municipio, en principio, se presenta con una estructura menos burocratizada.

Los organismos que figuran en la Tabla Índice, con sus respectivos numerales transcritos en el Inventario, son producto del relevamiento efectuado a la fecha y en base a la información disponible.

Dicho relevamiento no pretende ser exhaustivo en este Informe Parcial. Se espera obtener mayor información a fin de que en el Informe Final se pueda traducir en el Cap. III las recomendaciones y en base al análisis del Anexo I y II se determinen los vacíos y las superposiciones existentes a la fecha en materia hídrica.

En base al mismo se podrán proponer alternativas de acuerdo a las necesidades detectadas en el municipio y en particular lo que corresponde a la administración de la Laguna de San Vicente.

I. 2.b) Inventario de la legislación aplicable.

29. Cabe en este apartado consideraciones similares a las expuestas Supra párr.28.

El Inventario de la legislación aplicable al recurso hídrico, en particular a la Laguna de San Vicente, hace referencia a todos los temas de competencia legislativa federal, provincial y municipal.

Las columnas verticales muestran los tres niveles políticos y territoriales de gobierno que participan en la aplicación de las normas transcritas en el Anexo II. Las franjas horizontales muestran las diferentes temas que deben intervenir en la regulación del recurso hídrico.

I. 3. Fundamentos de su afectación jurídica - pública o privada

30. Supra párr. 6, se definió a los lagos y por identidad a las lagunas como bienes del dominio público.

Al considerar las aguas del dominio público resulta interesante analizar si son públicas por su naturaleza o por su afectación.

"El agua por sí, no es pública ni es privada: lo prueba el hecho de que no en todos los países su condición jurídica es idéntica". Es que el problema del agua no es el mismo en todas partes. Un país seco presentará obviamente características diferentes al de un país húmedo. (21).

Por ello la condición de pública o privada del agua depende de las circunstancias particulares de cada caso.

Para establecer el dominio público o privado de las aguas hay que tener en cuenta la afectación o destino público de las mismas.

Con respecto a las circunstancias tenidas en cuenta para dicha afectación es necesario considerar dos factores:

- La utilidad del recurso en función de sus usos públicos.
- La peligrosidad del mismo.

En síntesis, la afectación resulta de los beneficios o perjuicios que el recurso comporta a la sociedad.

Su determinación, depende de circunstancias de hecho y por lo tanto se encontrarán diferentes soluciones según el lugar en que dicho cuerpo de agua se encuentre. No obstante lo dicho, esto normativamente se expresa en el art. 2340 del Código Civil.

31. En este Ap. del Cap. I sólo se hace referencia a los fundamentos generales de su afectación. Las circunstancias especiales derivadas de su uso, serán analizadas en el Cap. II correspondiente al 2º Informe Parcial.

ANEXO I

INVENTARIO DE INSTITUCIONES CON RESPONSABILIDAD EN EL AREA ACTUANTE EN EL MUNICIPIO

FUNCIONES Y TEMAS DE RESPONSABILIDAD		NACIONAL	PROVINCIAL	MUNICIPAL
Legislación		2	2; 3	2; 3; 6
Reglamentación		1	4	4; 5
Adopción de políticas		1.1; 1.1.1; 1.1.1.2; 1.2; 1.2.2.1	1.2; 4; 4.1; 4.2; 4.3	1.2; 3; 4; 4.1; 4.2; 5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6
Planificación de recursos naturales y ambiente		1.1; 1.2; 1.2.0	1.1; 1.2; 1.2.0; 4.1; 4.1.1.1; 4.1.1.0; 4.1.2.1; 4.1.3	1.1; 1.2; 1.2.0; 4.1; 4.1.1.1; 4.1.1.0; 4.1.2.1; 4.1.3; 5.6.1
Administración de obras y servicios públicos		1; 1.1; 1.1.1; 1.1.1.2; 1.2; 2	1.1; 1.1.2; 1.2; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.0; 4.1.1.1; 4.1.2; 4.1.2.1	1.1; 1.1.2; 1.2; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.0; 4.1.2; 4.1.2.1; 5.3; 5.4
Administración de recursos naturales y ambiente		1.1; 1.1.1; 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.2; 1.2.0; 1.2.1; 1.2.2.2	1.2.0; 4.1; 4.1.1; 4.1.3; 4.1.1.0; 4.1.1.2; 4.1.2.1	1.2.0; 4.1; 4.1.1; 4.1.3; 4.1.1.0; 4.1.1.2; 4.1.2.1; 5.3; 5.4; 5.6
Impuestos, tasas y contribuciones		1.1; 1.1.2	1.1; 1.1.2; 4.4	1.1; 1.1.2; 4.4; 5.2
Policía de recursos ambientales y ambiente		1.2; 1.1.1	4.1.1.0; 4.1.2.1; 4.2; 4.2.1.1; 4.2.2	4.1.1.0; 4.1.2.1; 4.2; 4.2.1.1; 4.2.2; 5.3; 5.4; 5.6
Agua	Contaminación	1.1; 1.2; 1.2.1.1	1.2; 4.1; 4.1.1.0; 4.1.2.1; 4.3	1.2; 4.1; 4.1.1.0; 4.1.2.1; 4.3
	Conservación			
Fauna y flora	Conservación	1.1.1.2; 1.2; 1.2.0; 1.2.2.4; 1.2.2.6	1.1.1.2; 1.2; 1.2.0; 1.2.2.4; 1.2.2.6; 4.2; 4.2.2.1; 4.2.2.2	1.1.1.2; 1.2; 1.2.0; 1.2.2.4; 1.2.2.6; 4.2; 4.2.2.1; 4.2.2.2
	Aprovechamiento			
Suelo	Conservación	1.2; 1.2.2.3	1.2; 1.2.2.3; 4.1; 4.1.3; 4.1.3.1; 4.2.1.1	1.2; 1.2.2.3; 4.1; 4.1.3; 4.1.3.1; 4.2.1.1; 5.3; 5.4
	Aprovechamiento			
Servicios Públicos	Agua potable	1.1.0; 1.2.1.1	1.1.0; 1.2.0; 1.2.1.1; 4.1.1.0; 4.2.3; 4.3	1.1.0; 1.2.0; 1.2.1.1; 4.1.1.0; 4.2.3; 4.3; 5.4
	Recreación			

NOTA: Los numerales transcritos en el gráfico indican los organismos de la Tabla Índice.
El (.) precediendo un numeral indica dependencia respecto al numeral anterior.
El numeral (0) corresponde a un organismo descentralizado (autárquico o empresa pública).

TABLA ÍNDICE CON LOS NÚMEROS DE CÓDIGO DE LOS ORGANISMOS
REFERIDOS EN EL GRÁFICO

Organismos Públicos Nacionales

- 1 - Poder Ejecutivo de la Nación.
- 2 - Poder Legislativo de la Nación.
- 1.1 - Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.
- 1.1.0 - Obras Sanitarias de la Nación.
- 1.1.1 - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- 1.1.1.1 - Subsecretaría de Producción y Mercados.
- 1.1.1.2 - Subsecretaría de Pesca.
- 1.1.2 - Secretaría de Hacienda.
- 1.2 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.
- 1.2.1 - Subsecretaría de Ambiente Humano.
- 1.2.1.1 - Dirección Nacional de Calidad y Fomento Ambiental.
- 1.2.2 - Subsecretaría de Recursos Naturales.
- 1.2.2.1 - Dirección Nacional de Política de Recursos Naturales.
- 1.2.2.2 - Dirección Nacional de Administración de Recursos Naturales.
- 1.2.2.3 - Dirección de Conservación de Suelo.
- 1.2.2.4 - Dirección de Recursos Forestales Nativos.
- 1.2.2.5 - Dirección de Recursos Ipícolas y Ocuícolas.
- 1.2.2.6 - Dirección de Fauna y Flora Silvestres.
- 1.2.0 - Parques Nacionales.

Organismos Públicos Provinciales

- 3 - Legislatura Provincial.
- 4 - Poder Ejecutivo Provincial.
- 4.1 - Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
- 4.1.1.0 - Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia.
- 4.1.1.0 - Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural.
- 4.1.1.0 - Empresa Social de la Energía de Buenos Aires.
- 4.1.1 - Subsecretaría de Servicios Públicos.
- 4.1.1.1 - Dirección de Planeamiento y Seguimiento de Obras.
- 4.1.1.2 - Dirección Provincial de la Energía.
- 4.1.2 - Subsecretaría de Obras Públicas.
- 4.1.2.1 - Dirección Provincial de Hidráulica.
- 4.1.3 - Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda.
- 4.1.3.1 - Dirección Provincial de Tierras.
- 4.2 - Ministerio de Producción.
- 4.2.1 - Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería.
- 4.2.1.1 - Dirección de Radicación de la Industria.
- 4.2.2 - Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- 4.2.2.1 - Dirección de Desarrollo Forestal.
- 4.2.2.2 - Dirección de Pesca.
- 4.2.3 - Subsecretaría de Turismo Provincial.
- 4.2.4 - Dirección Provincial de Desregulación y Descentralización Productiva.
- 4.3 - Ministerio de Salud y Acción Social.
- 4.4 - Ministerio de Economía.

Organismos Municipales

- 5 - Intendencia.
- 5.1 - Secretaría de Bienestar Social.
- 5.2 - Secretaría de Hacienda.
- 5.3 - Secretaría de Obras Públicas.
- 5.4 - Secretaría de Servicios Públicos.
- 5.5 - Secretaría de Salud.
- 5.6 - Secretaría de Gobierno.
- 5.6.1 - Planeamiento.
- 5.6.2 - Tránsito.
- 5.2.1 - Descentralización.
- 5.2.1 - Contaduría General.
- 6 - Consejo Deliberante.

ANEXO II

INVENTARIO DE LEGISLACION APLICABLE EN EL AMBITO MUNICIPAL

NORMAS APLICABLES	NACIONAL	PROVINCIAL	MUNICIPAL
Cláusulas constitucionales	1	1; 2	1; 2; 3
Propiedad de las aguas	1.1	1.1; 2; 2.1; 2.8	1.1; 2; 2.1; 2.8; 3
Aguas públicas	1.1	1.1; 2; 2.1; 2.4; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.7.1	1.1; 2; 2.1; 2.3; 2.4; 2.6 2.7; 2.8; 2.9; 2.7.1; 3
Aguas privadas	1.1	1.1; 2; 2.1; 2.4; 2.6; 2.7 2.8; 2.9; 2.10; 2.7.1	1.1; 2; 2.1; 2.3; 2.4; 2.6 2.7; 2.8; 2.9; 2.7.1; 3
Modo de adquirir los usos	1.1	1.1; 2.1	1.1; 2.1; 3
Uso doméstico y municipal	1.1	1.1; 2.1; 2.4	1.1; 2.1; 2.4; 3
Uso pecuario	1.1	2.1; 2.4	2.1; 2.4; 3
Uso piscícola	1.1	2.1; 2.6	2.1; 2.6; 3
Uso en transporte	1; 1.1; 1.9	1; 1.1; 1.9; 2; 2.1	1; 1.1; 1.9; 2; 2.1
Contaminación	1.2; 1.3; 1.6; 1.7; 1.8.1 1.8.1.1	1.2; 1.3; 1.6; 1.8.1; 1.8.1.1; 2.5; 2.7; 2.7.1	1.2; 1.3; 1.6; 1.8.1; 1.8.1.1; 2.5; 2.7; 2.7.1
Restricciones al dominio	1.1; 1.9	1.1; 1.9; 2.3	1.1; 1.9; 3
Obras hidráulicas	1.2; 1.8.1	1.2; 1.8.1; 2.9	1.2; 1.8.1; 2.9
Administración de recursos naturales	1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.8.1; 1.9; 1.10; 1.11	1; 1.1; 1.4; 1.6; 1.9; 1.10; 1.11; 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6	1; 1.1; 1.4; 1.6; 1.9; 1.10; 1.11; 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 3
Política de recursos naturales	1; 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9; 1.10; 1.11	1; 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9; 1.10; 1.11; 2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10	1; 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9; 1.10; 1.11; 2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10
Fauna	1.1; 1.1.1; 1.4; 1.5; 1.11	1.1; 1.11; 2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.6; 2.10	1.1; 1.11; 2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.6; 2.10
Flora	1.1; 1.10; 1.11	1.1; 1.10; 1.11; 2.1; 2.10	1.1; 1.10; 1.11; 2.1; 2.10
Suelo	1.1; 1.6; 1.11	1.1; 1.6; 1.11; 2.1; 2.5; 2.10	1.1; 1.6; 1.11; 2.1; 2.5; 2.10
Aire	1.1; 1.3; 1.7	1.1; 1.3	1.1; 1.3

NOTAS: Los numerales transcriptos en el gráfico indican las normas jurídicas que obran en la Tabla Índice.
El (.) precediendo un numeral indica el grado de subordinación respecto del numeral anterior.

TABLA ÍNDICE DE LEGISLACIÓN APLICABLE

Legislación Nacional

- 1 - Constitución Nacional: arts. 5; 67 incs. 9, 11, 12, 14, 15, 16, 27 y 28; 101; 104 y 105.
- 1.1 - Código Civil: arts. 2340 a 2343; 2347; 2349; 2350; 2527; 2547 a 2549; 2572 a 2582; 2583 a 2586; 2630 a 2653; 3082 y ss; 3104 a 3107.
- 1.2 - Ley 20324: Organización de Obras Sanitarias de la Nación.
- 1.3 - Ley 20284: Preservación de los recursos del aire.
- 1.4 - Ley 23919: Ratificación de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional como habitats acuáticos (RAMSAR).
- 1.5 - Ley 22421: Ley Nacional de Conservación de la Fauna.
- 1.6 - Ley 22428: Ley Nacional de Fomento a la Conservación de Suelos.
- 1.7 - Ley 24051: Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
- 1.8 - Ley de Ministerios.
- 1.9 - Ley 20094: Ley de Navegación.
- 1.10 - Ley 13273: Defensa de la Riqueza Forestal.
- 1.11 - Ley 22351: Parque Nacionales.
- 1.8.1 - Decreto 674/89: Control de la contaminación hídrica.
- 1.1.1 - Decreto 691/81: Licencia caza deportiva.
- 1.8.1.1 - Resolución Ministerial 361/88: Atribuye a la Secretaría de Recursos Hídricos la formulación y ejecución en el ámbito del Ministerio, la preservación cuali y cuantitativa de los recursos hídricos.

Legislación Provincial

- 2. - Constitución Provincial: arts. 90; 132; 133; 134; 135; 181 y 182.
- 2.1 - Código Rural Ley 7616. Texto según Ley 10081: Libro II y Libro III.
- 2.2 - Ley Orgánica de Ministerios 10132.
- 2.3 - Ley Orgánica de las Municipalidades.
- 2.4 - Ley de Riego 5262.
- 2.5 - Ley de Ordenamiento Territorial 8912 modificada por Decreto/Ley 10128/83.
- 2.6 - Ley 5781 sobre pesca;
- 2.7 - Ley 5965 sobre inficción de aguas y contaminación;
- 2.8 - Ley 9531 delimitación del dominio publico municipal.
- 2.9 - Ley 10106 sobre régimen hidráulico provincial (trabajos y obras hidráulicas).
- 2.10 - Ley 10907 sobre Parques y Reservas Naturales.
- 2.7.1 - Decreto 10355/60. Reglamentario de la Ley 5965.
- 2.1.2 - Decreto 593 sobre caza comercial.
- 2.1.2.1 - Resolución 175/83 (H.A.A) Fauna comercialización y/o industrialización de espacios y productos y/o subproductos de la fauna silvestre.

Legislación Municipal

- 3 - Ley Orgánica de Municipalidades: arts. 28 incs. 4, 5, 6, 7; 57; 58; 59; 60; 62; 107; 108; 109; 131; 132; 135; 158; 225; 226 inc. 4; 229; 230; 271 y 272.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- (1). MARIENHOFF, Miguel: "Régimen y Legislación de las aguas públicas y privadas". Serie II - Obras - Número 9. Ed. Abeledo - Perrot 1971.
- (2). Op. cit. (1).
- (3). SPOTA, Alberto G: "Tratado de Derecho de Aguas". Tomo II. Ed. Jesús Menéndez - Buenos Aires 1941.
- (4). Op. cit. (1).
- (5). ALLENDE, Guillermo: "Derecho de Aguas". Ed. Eudeba - Buenos Aires 1971.
- (6). Op. cit. (1).
- (7). Op. cit. (1).
- (8). LLAMBIAS, Jorge J.: "Código Civil Anotado". Tomo IV A - Derechos Reales. Ed. Abeledo-Perrot.
- (9). Op. cit. (8).
- (10). GIRAUT, Miguel: "Estudio de Base para la recuperación y aprovechamiento de la Laguna San Vicente. Provincia de Buenos Aires" - Geomorfología de la Cuenca. Ed. CFI - 1990.
- (11). FRIAS, Pedro J: "Introducción al Derecho Público provincial". Ed. Depalma - Buenos aires 1980.
- (12). Op. cit. (11).
- (13). QUIROGA LAVIE, Humberto: "Derecho Constitucional". Ed. Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales - Buenos Aires 1978.
- (14). Op. cit (13).
- (15). Op. cit. (13).
- (16). CANO, Guillermo J: "Estudio sobre linea de ribera". Tomo I. Ed. CFI - Buenos Aires 1988.
- (17). Op. cit. (3).
- (18). CANO, Guillermo J: "Derecho ppolítica y administración de aguas". Tomo III. Volúmen 2. Ed. INELA 1976.

(19). CANO, Guillermo J.: "Introducción a la problemática ambiental municipal. El porqué del Simposio". 1º Simposio Iberoamericano sobre Medio Ambiente y Municipio. Bs. As.- Iguazú - Octubre 1986. Ed. FARN.

(20). Op. cit. (18).